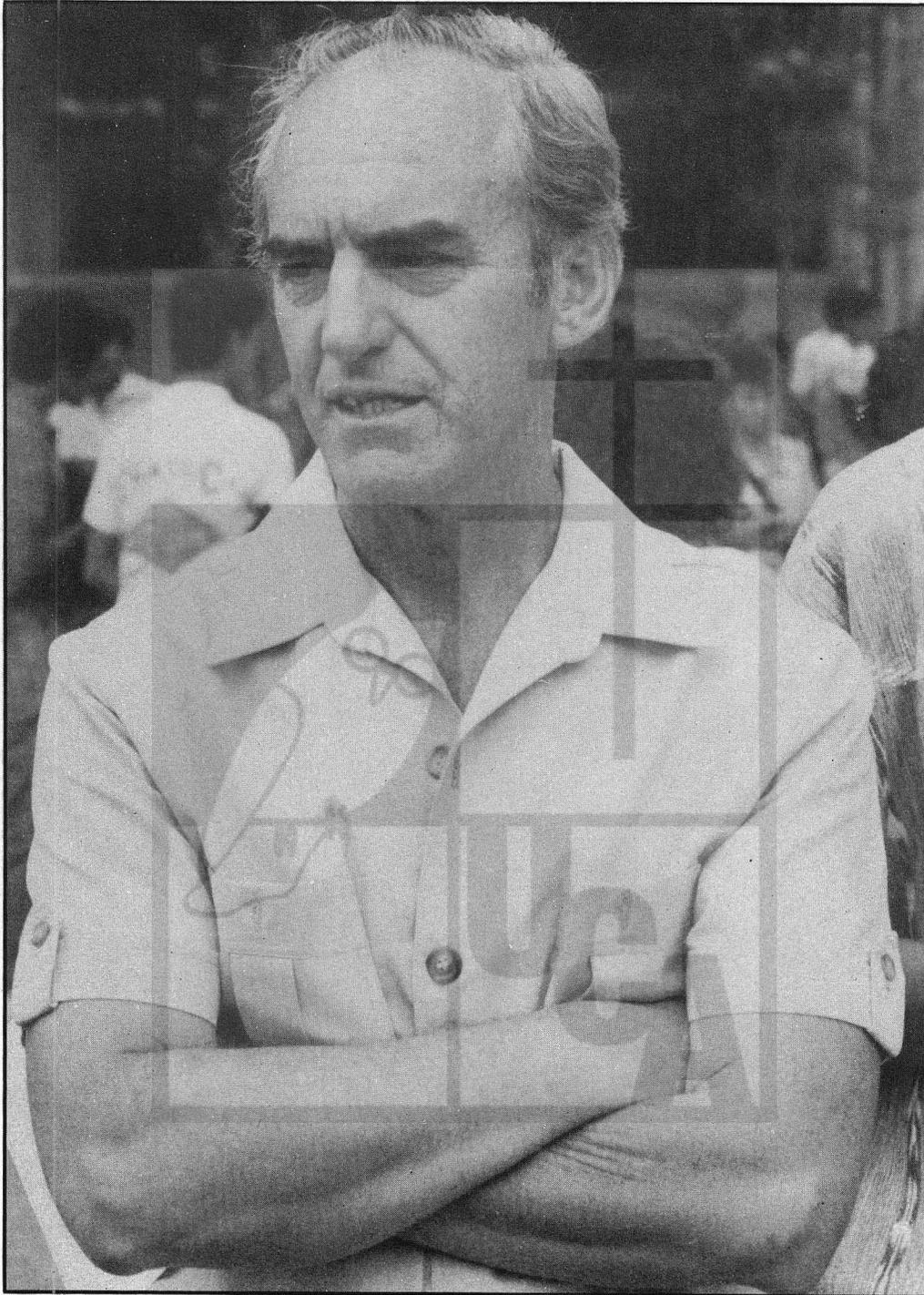


Dr. Ignacio Martín-Baró, S.J.
Director de ECA 1975 - 1976



Dr. Ignacio Ellacuría, S.J.
Director de ECA 1976 - 1989

In memoriam

**Ignacio Ellacuría,
Ignacio Martín-Baró,
Segundo Montes,
Juan Ramón Moreno,
Amando López,
Joaquín López y López,
Elba y Celina Ramos.**

El consejo de redacción de la revista había planificado que esta edición la dedicaría a analizar el proceso de diálogo-negociación y las perspectivas de paz en el país. La realidad nos ha obligado a dedicar esta edición a la memoria de su director Ignacio Ellacuría, a la de dos de sus miembros del consejo de redacción, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes, y a sus compañeros Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, y Elba y Celina Ramos. Ellos escribieron con su muerte y con su sangre esa edición dedicada al diálogo-negociación y a las perspectivas de la paz en El Salvador. Los asesinaron por creer y luchar por la paz y por negarse a aceptar la alternativa militar como solución al conflicto. Esta edición 493-494 de la Revista Estudios Centroamericanos (ECA) es en memoria suya.

El P. Ignacio Ellacuría era director de ECA desde 1976; antes de él lo fue el P. Ignacio Martín-Baró, entre 1975 y 1976, quien, además, entre 1971 y 1974, fue jefe del consejo de redacción. El P. Segundo Montes fue jefe de redacción de ECA de 1978 a 1982. Los tres publicaron sus primeros artículos en esta revista y eran asiduos colaboradores, cada uno de ellos en su especialidad. Ahora todos ellos son mártires de la paz y de la verdad.

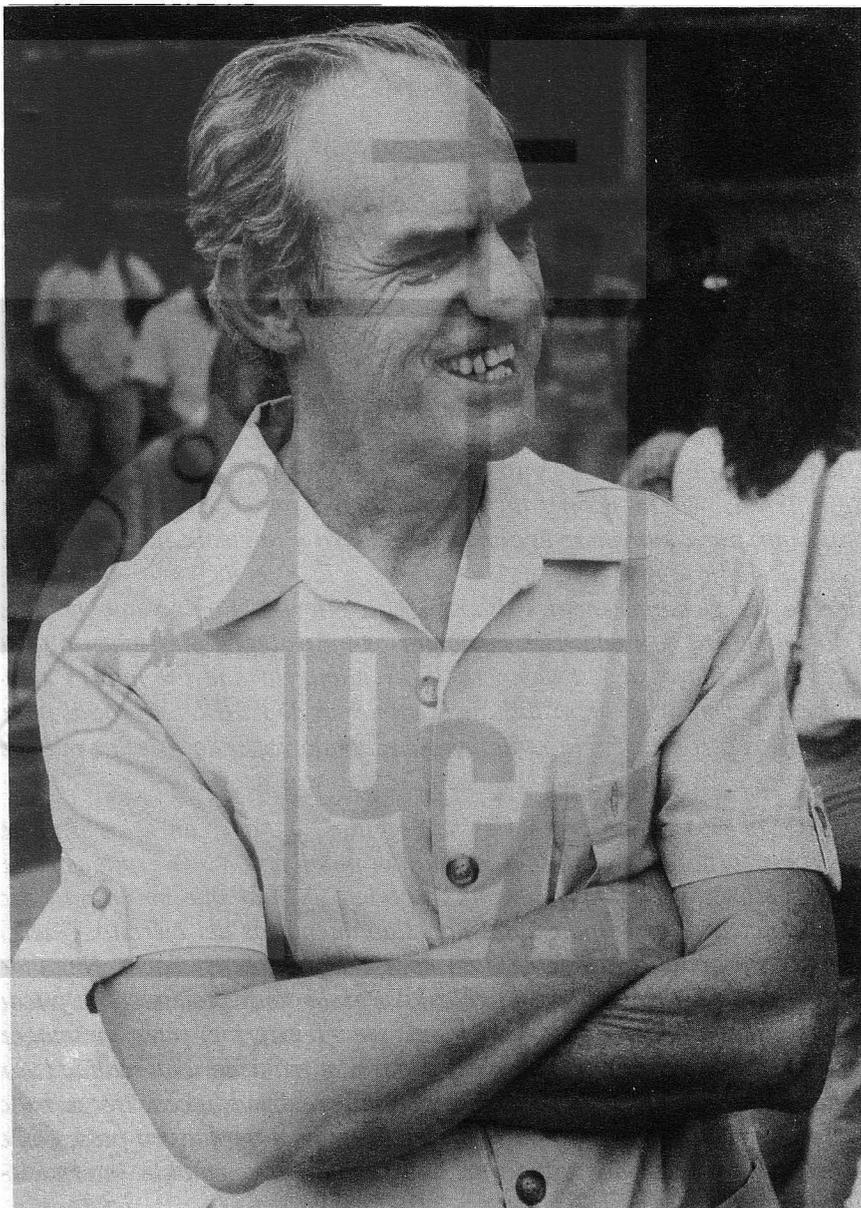
El P. Ignacio Ellacuría y sus compañeros fueron asesinados en nombre de la democracia y de la patria, y quizás también en nombre de Dios. Quienes los mataron usaron todos estos nombres en vano, porque todos ellos lucharon por una democracia real, en la cual prevaleciera la lógica de las grandes mayorías sobre la de las minorías privilegiadas, y la lógica del trabajo sobre la del capital; amaron esta atormentada patria nuestra y le dieron lo mejor de sí mismos, y creyeron en el Dios de Jesús hasta seguirlo en su muerte y resurrección. Su asesinato y su martirio han puesto en evidencia ante el mundo quiénes eran ellos y quiénes son sus asesinos.

Su martirio ha sacado a la luz su difícilmente igualable calidad académica comprometida con la liberación de las mayorías pobres de nuestro país; su entrega paciente, y hasta el límite de sus fuerzas en la labor universitaria, en la docencia, en la investigación, en la educación, en la denuncia hablada y escrita, y en el ministerio sacerdotal de un pueblo que los acogió con cariño y que oyó atento sus predicaciones y consejos; sus ricas e inabarcables cualidades personales; y su entrega al reino de Dios.

Con ellos, tal como lo dijo el P. Ellacuría refiriéndose a Monseñor Romero, Dios ha pasado por El Salvador otra vez. Todos ellos, cada uno a su manera, hicieron presente a Dios en la universidad, en el colegio, en la escuela, en conferencias y seminarios, en homilias y charlas, en la prensa y en la televisión, entre los amigos y colegas. Dios ha pasado con ellos haciéndose presente y acercando más su reino a nosotros. Sus pequeños gestos, sus clases, sus escritos, sus cosas personales, su recuerdo vivo... en todas esas cosas grandes y pequeñas, cargadas de profetismo y utopía, de denuncia de las estructuras injustas que nos han llevado a diez años de guerra y de anuncio de una sociedad nueva, Dios también pasó en medio de nosotros anunciando la paz, diciendo la verdad y denunciando el pecado de nuestra sociedad. Su cariño y su ternura fueron el cariño y la ternura de Dios acariciándonos.

Al igual que el martirio de Monseñor Romero, los mártires de la UCA han puesto de nuevo a El Salvador en primera plana. No es exagerado afirmar que ahora, junto con Monseñor Romero, son los salvadoreños más conocidos mundialmente. Su vida, pasión y muerte han resonado en todas partes. Esta relevancia internacional de nuestro país es triste, porque denuncia más asesinatos y más sangre, pero también es resurrección, porque ahora ellos viven para siempre en pueblos de diversos continentes, culturas, lenguas y creencias. Sus vidas han desbordado la UCA misma y el ámbito nacional. Se han vuelto universales, han despertado admiración, deseos de seguirlos y ya

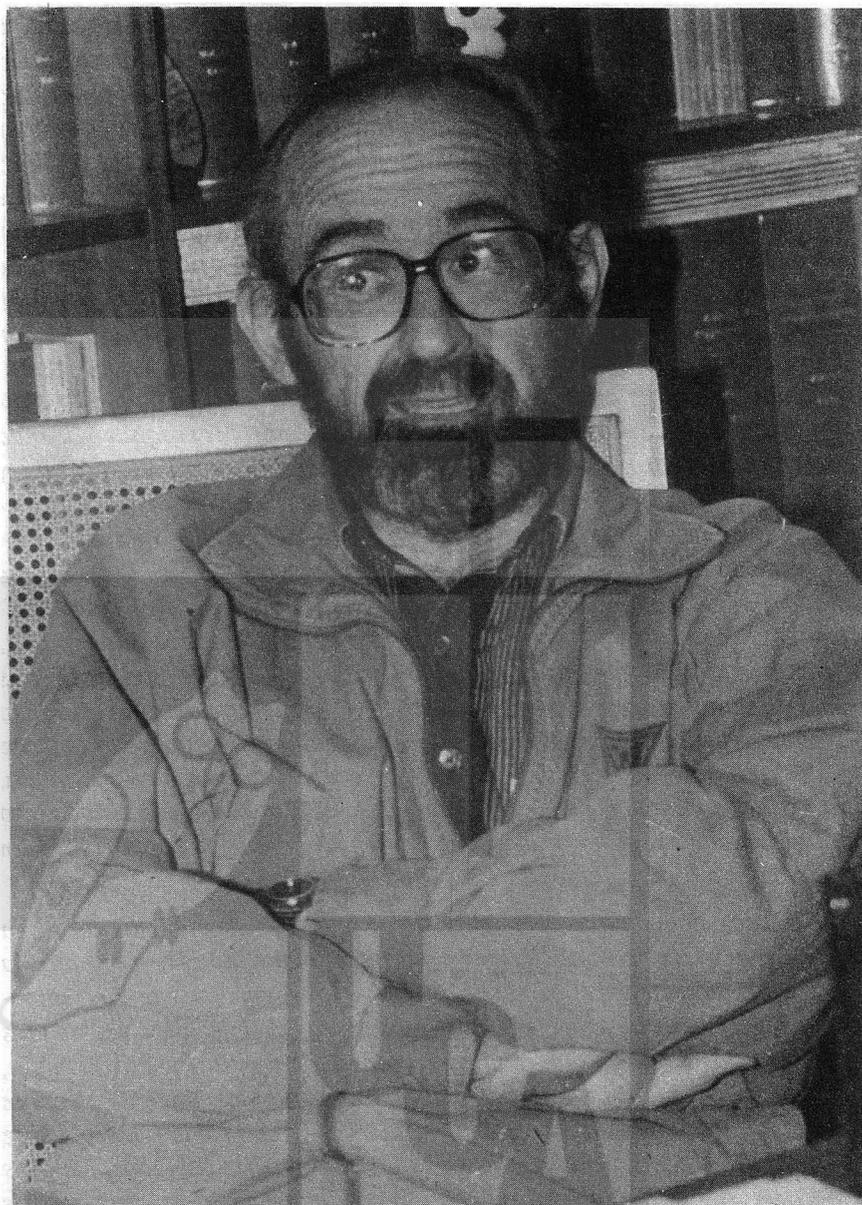
están animando a los desanimados. Sus cuerpos no han quedado tirados boca abajo en la grama, sino que junto con el sol de aquella sombría mañana del 16 de noviembre, ya se han levantado para iluminar el futuro de El Salvador. Sus vidas y sus obras están siendo reconocidas universalmente, y sus nombres han comenzado a ser escritos en calles, plazas, parques, escuelas, bibliotecas, etc. Ya no nos pertenecen. Ahora son patrimonio de la humanidad y los compartimos con ella.



La masacre de la UCA también ha puesto en evidencia ante la nación y ante la comunidad internacional a sus hechores. Desde hace mucho tiempo y desde estas páginas, los padres Ellacuría, Martín-Baró y Montes denunciaron que en todos los crímenes de esta naturaleza, como los de la UCA, las pocas averiguaciones que se habían hecho apuntaban hacia miembros de la Fuerza Armada. De esta sangrienta historia forman parte los asesinatos de los dirigentes del FDR, de las cuatro religiosas norteamericanas, de Monseñor Romero y sus sacerdotes, y del teólogo suizo Weiss y su compañero, así como también las masacres de El Mozote, el río Sumpul, Las Hojas, San Sebastián, y ahora la UCA y Cuzcatancingo, donde, el 18 de noviembre de 1989, dos días después de los asesinatos de la UCA, los soldados fusilaron sumariamente a siete trabajadores. En todos estos casos, los asesinos han actuado impunemente con lujo de violencia y crueldad.

La propaganda gubernamental ha tratado en vano de ocultar sistemáticamente esta historia de constantes abusos a los derechos humanos, creando y difundiendo versiones oficiales, en las cuales se han ignorado aspectos fundamentales de la realidad, otros se han distorsionado e incluso se han falseado e inventado algunos de ellos. El recurso más socorrido ha sido culpar a la izquierda o al FMLN. Esto es lo que han intentado hacer también en el caso de los jesuitas de la UCA. Los funcionarios gubernamentales dijeron que era un acto desesperado de la izquierda, un acto para poner en dificultades al gobierno, para aumentar el clima de zozobra y angustia. El fiscal de la república dijo que era temerario acusar a la Fuerza Armada y el presidente de la conferencia episcopal dijo que era ilógico que hubiera sido la Fuerza Armada. Los comentarios más alucinantes dicen que se trata de militares de la democracia cristiana, la que así habría cumplido su promesa de imposibilitar el gobierno de ARENA. Pero, al igual que en los otros casos, la realidad ha acabado saliendo a la luz pública y ha puesto en evidencia a responsables de estos asesinatos.

Los voceros gubernamentales han tenido que hacer un gran esfuerzo imaginativo para convencer a la opinión pública con sus explicaciones. Pese a ello, su versión oficial no ha podido ocultar que, en la mayoría de estos casos, los responsables han sido miembros del ejército. Querer seguir ocultando este terrible dato no ayuda a la democracia. Negando la realidad no se consigue cambiarla. Por lo tanto, tampoco se puede esperar una imagen positiva del país en el exterior, pues la imagen responde a la realidad y en nuestro caso se trata de una realidad tan voluminosa que es difícil ocultarla con una retórica hueca. No se trata tanto de crear comisiones para cuidar la imagen de nuestro país, como de cambiar realidades para que la imagen sea aceptable internacionalmente.

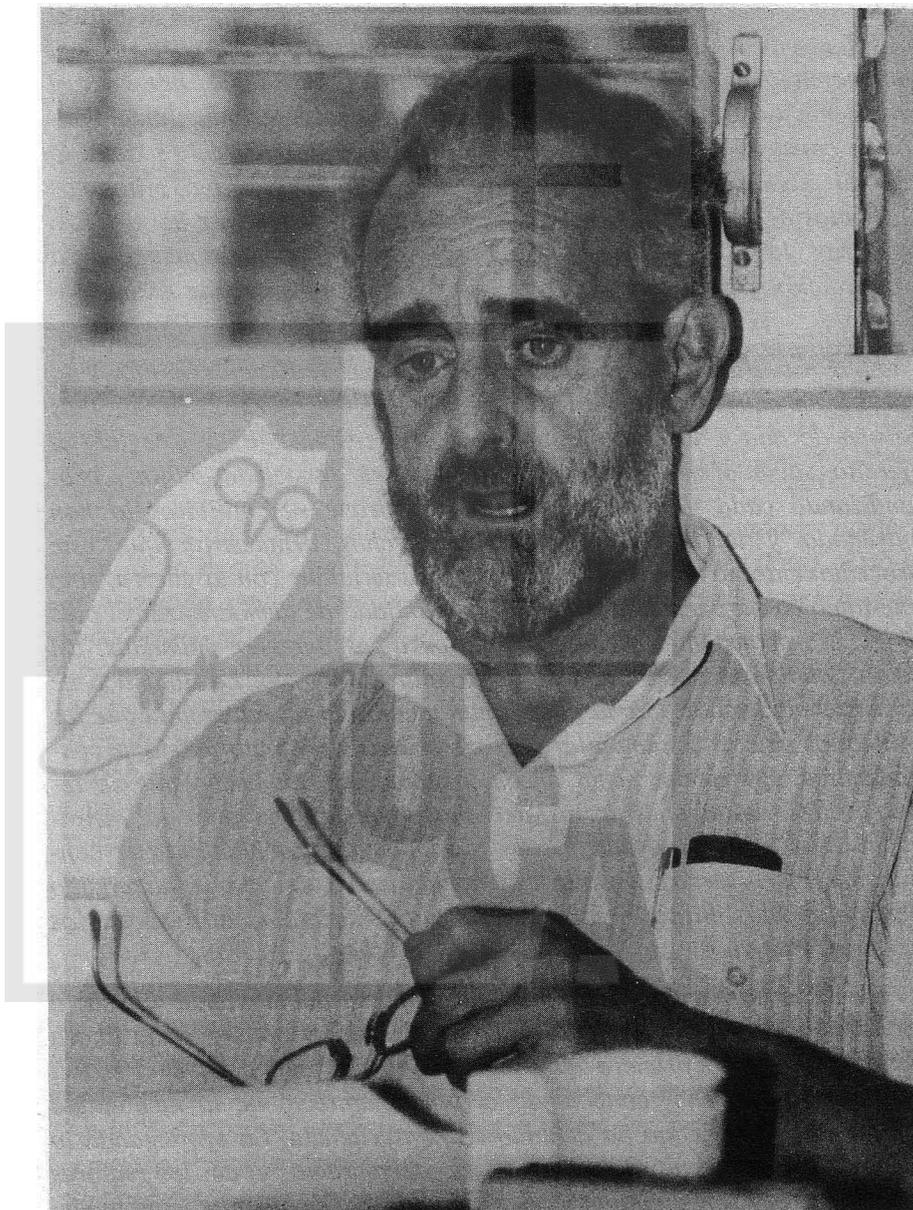


Los asesinatos de la UCA ofrecen una nueva oportunidad al alto mando de la Fuerza Armada, al gobierno del presidente Cristiani y al gobierno norteamericano para preguntarse qué tiene de inadecuado esta Fuerza Armada que sigue generando oscuros elementos anti-democráticos, pese a los millones de dólares que le han estado dando durante años, al entrenamiento para profesionalizarla y a los cursos sobre derechos humanos. Mientras la Fuerza Armada no cambie de

rumbo no será posible ni la paz, ni la democracia, y, además, seguirá legitimando la rebeldía armada del FMLN. Esta no es una pregunta retórica porque el operativo de la UCA no fue organizado ni conducido por cualquier miembro de la Fuerza Armada, sino que fue dirigido por oficiales y la orden fue dada por el director de la Escuela Militar, supuestamente por quien debe enseñar a los aprendices de oficiales qué debe ser un militar salvadoreño. El operativo no fue ejecutado por cualesquiera soldados de cualquier guarnición, sino por miembros de uno de los batallones más elitistas de la Fuerza Armada, el batallón Atlacatl. El historial más reciente de este batallón demuestra con hechos lo que estamos diciendo: en febrero de 1989, atacó un hospital de campaña del FMLN en los alrededores de El Chupadero (Chalatenango); en julio, Lucio Parada, Héctor Joaquín Marroquín Miranda y cinco más fueron capturados en los cantones de Tres Ceibas y Camotepeque, más tarde apareció el cuerpo del primero en una sepultura superficial y los demás en la Primera Brigada de Infantería; en ese mismo mes, una promotora laica de la parroquia de Jayaque fue violada por varios soldados de dicho batallón; en agosto, Miguel E. Miranda Reina, estudiante del Ricaldone, fue asesinado a sangre fría; en octubre, Pedro Chicas fue capturado en el cantón San José Las Flores (Chalatenango) y desde entonces se encuentra desaparecido; lo mismo le sucedió a Julio Ramírez, desaparecido desde julio. En octubre de 1989, César Joya Martínez, un desertor de la Fuerza Armada, admitió haber participado en el asesinato de Parada Cea. A todo eso hay que añadir la masacre de 68 civiles en Cabañas y la de otros 34 en Chalatenango, ambas ocurridas en 1984.

Los datos demuestran que, pese a las profesiones públicas de fe en la democracia de los comandantes militares, falta mucho para que la Fuerza Armada sea capaz de garantizar la seguridad de los salvadoreños, tal como lo exige la Constitución. Los seis jesuitas asesinados creyeron estar seguros al encontrarse rodeados por la Fuerza Armada, después que el batallón Atlacatl había inspeccionado meticulosamente su residencia, en la cual no encontró nada comprometedor. Después de esto, ¿quién puede garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño? Los mandos militares alegan que no fue la institución, sino algunos de sus miembros. Entonces, ¿quién garantiza que los miembros de la Fuerza Armada cumplan con su deber constitucional de proteger la vida y la propiedad de todos los salvadoreños? Si la Fuerza Armada quiere contar con la credibilidad nacional e internacional debería investigar a fondo la masacre de la UCA y los otros asesinatos, presentando ante la justicia a los verdaderos culpables. La Fuerza Armada no debería temer estas investigaciones y sus consecuencias, aunque éstas toquen a

algunos de sus altos mandos. Quizás en un principio los resultados de estas investigaciones conmocionen sus estructuras internas, pero esto mismo hará salir de ella a todos los elementos indeseables por poco profesionales y democráticos, evitará que se sigan violando los derechos humanos y aportará positivamente al proceso democrático. Tratar de ocultar lo que de una u otra forma se acaba conociendo y tratar de justificar lo injustificable no le hacen ningún servicio a la



Fuerza Armada ni al país. Es triste que, en buena medida, haya sido la presión internacional la que ha obligado a investigar la masacre de la UCA y a llevar ante la justicia a algunos de los responsables, cuando el Estado mismo debería haber sido el primero y más interesado en hacerlo. De no haber sido por el escándalo internacional, la masacre de la UCA probablemente hubiera corrido la misma suerte que el asesinato de Moseñor Romero y el de tantos otros salvadoreños.

La masacre de la UCA ha demostrado también que, de hecho, el presidente de la república no tiene pleno control sobre el ejército. Así lo reconoció públicamente el presidente Bush. En efecto, mientras el presidente Cristiani reconocía que el P. Ellacuría era la única oposición constructiva del país y en por lo menos dos ocasiones discutió con él algunos de los problemas más graves del país, algunos elementos de la Fuerza Armada decidieron matar al rector de la UCA. Mientras la Fuerza Armada no se someta completamente a la Constitución y al poder civil, la democracia no será posible en nuestro país.

La Casa Blanca y el Congreso norteamericano también han sido puestos en entredicho por la masacre de la UCA, porque durante más de una década y durante tres períodos presidenciales han entregado al ejército salvadoreño millones de dólares en asistencia militar, profundizando cada vez más la guerra, y porque sus militares lo han entrenado y lo han asesorado. Los hechos demuestran que este procedimiento no sólo no ha sido capaz de terminar con la guerra, sino que también ha puesto en peligro la posibilidad de democratizar el país al generar constantes y masivos abusos a los derechos humanos, así como también la posibilidad de desarrollo económico. La dinámica de la asistencia militar y de la guerra han alcanzado tal autonomía que los principios éticos y humanitarios casi sólo tienen importancia propagandística. En efecto, hasta ahora lo único que ha hecho que se reduzcan las violaciones a los derechos humanos ha sido la instrumentalización de la ayuda militar y económica. La amenaza de condicionar, recortar o suprimir esta ayuda es lo único que ha podido persuadir a los militares salvadoreños de la necesidad de respetar los derechos humanos.

El gobierno norteamericano ha sido víctima del siguiente dilema: o mantiene a la Fuerza Armada o el FMLN toma el poder. Hasta ahora ha optado por lo primero que ha sido lo más fácil para él. Pero el ejército salvadoreño, conociendo el funcionamiento de la mentalidad militar norteamericana ha actuado en consecuencia. La propaganda lo ha presentado como defensor de la democracia y de los valores occidentales y, en cuanto tal, han actuado casi con total autonomía.



Todo lo que ha hecho o dicho ha sido disculpado u ocultado en nombre de la lucha que ha estado librando por occidente y sus valores. Esto le ha permitido convertirse en el árbitro de la sociedad y del Estado, colocándose por encima de la ley. Más aún, se ha convertido en el garante de su interpretación auténtica. Los funcionarios de Washington son responsables de que el ejército salvadoreño haya adquirido esta singular posición privilegiada. Ellos lo han promovido y lo han conservado, defendiéndolo, ocultando sus violaciones de los derechos humanos y financiándolo. Ellos le han proporcionado la ideología con la cual justifica sus actuaciones. A estos funcionarios norteamericanos no se les ha ocurrido otra alternativa para promover la democracia, lo cual no es extraño porque la historia diplomática norteamericana en Centroamérica se ha caracterizado por falta de imaginación y creatividad.

La investigación de la masacre de la UCA indica un cambio importante, pero limitado y parcial. Sin duda, este ha sido el crimen más y mejor investigado hasta ahora en la historia del país. Sin embargo, las investigaciones han estado más interesadas en presentar algunos resultados para satisfacer el clamor internacional, y en especial al Congreso norteamericano, que en hacer justicia. El gobierno ha en-

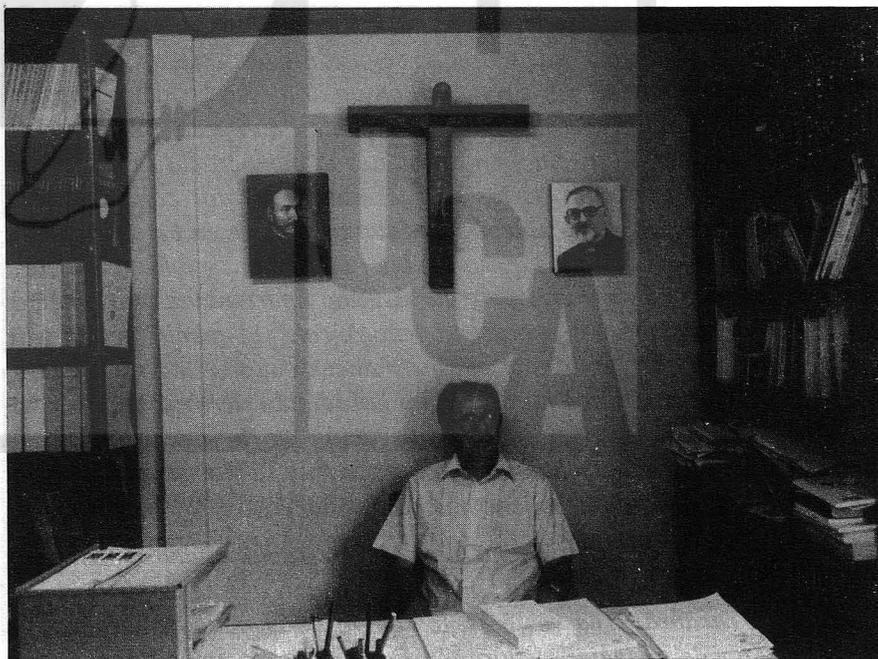
tregado a la justicia sólo a aquellos oficiales y soldados que dispararon directamente contra sus víctimas. Los demás miembros del operativo, quienes dieron cobertura, quienes dispararon contra el edificio del Centro Monseñor Romero y quienes destruyeron su mobiliario y equipo no han sido llevados ante la justicia. Tampoco han encausado al soldado que arrastró al interior de la residencia el cadáver de uno de los padres. Ni siquiera han presentado al soldado que disparó contra otro sacerdote, dejándolo mal herido; sólo han llevado ante el juez a quien lo remató. Tampoco han investigado con qué fue destruido el equipo y el mobiliario del Centro Monseñor Romero, ni mucho menos han hecho el intento de indemnizar por las pérdidas materiales. En estas condiciones, la justicia que se está haciendo es limitada y poco cumplida.

Se hará justicia completamente cuando todos los elementos responsables del múltiple asesinato de la UCA hayan dado cuenta de sus actos, incluidos los autores intelectuales, aquellos que discutieron y planearon el asesinato. Es muy difícil aceptar que un solo coronel decidiera ante sí y por sí mismo esta masacre. Para estos autores intelectuales, los padres Ellacuría, Martín-Baró y Montes eran tan dañinos que había que matarlos "sin dejar testigos." Para nadie es ya un secreto la animadversión de algunos sectores militares contra la UCA. Para ellos, los jesuitas de la UCA eran aliados del FMLN. En diversas ocasiones, algunos altos mandos militares acusaron públicamente a la UCA de dar apoyo logístico, material e ideológico al FMLN. El viceministro de defensa acusó a la UCA de ser el centro de operaciones donde se planificó el asesinato del fiscal García Alvarado. El viceministro de seguridad pública declaró a la prensa que consideraba a los jesuitas de la UCA "plenamente identificados" con el movimiento subversivo. Estas acusaciones nunca fueron comprobadas ni desautorizadas; sino que fueron sumándose a la campaña sistemática de algunos grandes medios de comunicación contra la UCA. La cadena nacional de radio difundió amenazas de muerte contra los jesuitas asesinados en los primeros días de la ofensiva, e incluso el mismo vicepresidente de la república acusó en ella al P. Ellacuría de haber envenenado la mente de la juventud salvadoreña. Sorprende encontrar que los oficiales militares comprometidos en la masacre de la UCA la hayan justificado con estas mismas calumnias.

Aparentemente, los autores intelectuales de la masacre de la UCA piensan que tienen licencia para matar a quienes consideran enemigos del país. Por eso es tan importante dar con ellos también. En un Estado de derecho, la vida de los ciudadanos no puede estar en manos de estos círculos oscuros. Esta masacre ha venido a recordarnos de nuevo algo

fundamental para la convivencia humana, que todos tenemos derecho a la vida y que está prohibido matar. En una sociedad democrática debe haber espacio para pensar y expresarse. El P. Ellacuría, como cualquiera de sus compañeros, hubiera discutido democráticamente con cualquiera de sus acusadores. Siempre estuvo dispuesto a hacerlo en la televisión, donde discutió con los ideólogos de la extrema derecha o en la Cátedra Universitaria de Realidad Nacional, a la cual procuró invitar a los representantes de todas las tendencias, precisamente, para discutir universitariamente en un foro abierto las ideas políticas, o en esta misma revista, cuyas páginas siempre estuvieron abiertas a la exposición y discusión de las ideas, siempre y cuando el planteamiento tuviera altura universitaria. Asimismo a quienes dudaban de la integridad de la UCA les hubiera facilitado que pudieran aclarar sus dudas. Ni él ni la UCA tenía nada que esconder. Por eso lo hallaron en su residencia en las primeras horas del 16 de noviembre. Varias veces intentó acercarse a los militares para dialogar con ellos sobre la guerra y la paz, pero le fue prácticamente imposible. Todavía en la noche del cateo pidió al oficial al mando del operativo que lo pusiera en comunicación con el ministro de defensa o con el jefe del alto mando, pero aquél se lo negó, alegando que cumplía órdenes y en nombre del estado de sitio.

El problema real era que tanto el P. Ellacuría como sus compañeros tenían demasiada razón en las cosas que decían. Sus palabras tenían



mucha verdad. Así lo supo reconocer mucha gente del pueblo, que los oía en la radio o los miraba en la televisión. En una ocasión, una mujer del pueblo le dijo al P. Ellacuría que desde Monseñor Romero nadie había hablado tan claro ni los había defendido tanto como él. Como los autores intelectuales no tenían ni razón ni verdad, respondieron con el asesinato. Y lo volverán a hacer si no son descubiertos y llevados ante la justicia para que rindan cuentas de su sinrazón y de su mentira. Mientras sigan actuando impunemente desde la clandestinidad volverán a ordenar la muerte de quienes sigan optando por la razón para reclamar los derechos de los pobres a la vida y al trabajo.

Estos son los verdaderos enemigos de la democracia. Es decir, aquellos que, aceptando sus apariencias formales (los rituales electorales periódicos), no están preparados para convivir con quienes no piensan como ellos. Si el FMLN representa el desafío mayor para la democracia en El Salvador, su mayor peligro lo constituyen estas fuerzas que, bajo fachadas "democráticas," son incapaces de tolerar el libre juego democrático de las ideas. La lucha por la democracia exige descubrir a sus peores enemigos. La presencia de estas fuerzas antidemocráticas en el gobierno y en la sociedad salvadoreños legitiman las exigencias del FMLN de depurar a la Fuerza Armada, de reestructurar el sistema judicial y de reformar la Constitución. El caso de la masacre de la UCA no quedará cerrado justamente hasta que no sean encausados los autores intelectuales.

Si no se hace pronta y cumplida justicia en el caso de la UCA, la democracia y la justicia salvadoreñas seguirán cuestionadas. Este caso brinda una oportunidad para romper con un doloroso y oscuro pasado, constituido por miles de casos en los cuales aún está pendiente la administración de la justicia y en los cuales la democracia se encuentra en suspenso. El asesinato de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras ha puesto de manifiesto lo mucho que falta por hacer en las estructuras militares y políticas del país, pero también ofrece una oportunidad para llegar hasta el fondo del crimen y dar así una oportunidad a la justicia. Nada fortalecerá más el proceso democrático y la administración de justicia que sacar a luz lo que aún permanece oculto. De esta manera, esta sangre que tanto nos ha dolido no habrá sido derramada en vano. Los primeros resultados de la investigación de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos han dado pie a la esperanza. Sin embargo, esa comisión aún tiene mucho por hacer.

Si la masacre de la UCA ha llevado la irracionalidad a extremos desconocidos, también debería impulsar a tratar de reencontrar el camino de la cordura. Una vez más, la sangre derramada demuestra que la guerra no debe seguir devorando a los mejores salvadoreños, con

ello no gana ni uno no otro bando, sino que todos perdemos. Esta sangre, universitaria y popular, ya ha comenzado a producir frutos al obligar a discutir si debe continuar la ayuda militar norteamericana a El Salvador, o si ésta debe estar condicionada a un proceso de diálogo-negociación y a un cese del fuego. El gobierno norteamericano se ha visto obligado a hablar de la necesidad de encontrar una salida negociada al conflicto, deteniendo el derramamiento de sangre y la destrucción del país, y haciendo cambios importantes. Esta es la primera vez que el gobierno norteamericano adopta una postura tan clara a favor de una salida negociada. En cualquier caso, la masacre de la UCA, más que el bombardeo indiscriminado de la población civil durante la ofensiva de noviembre, ha obligado a hacer muchas preguntas importantes sobre la marcha de la guerra y su futuro. Al menos este es un buen comienzo para que nosotros sigamos lo que ellos dejaron empezado.

También tenemos que seguir la tarea universitaria. Ellos nos han enseñado cómo es posible una universidad cristiana en el tercer mundo, una universidad al servicio de los pobres. Todas las actividades universitarias deben tener en su horizonte las necesidades y los sufrimientos de las mayorías populares, tal como ellos lo hicieron incansable y admirablemente. Por eso, la universidad debe seguir siendo parcial, pero objetiva. Encarnándose en los pobres, la universidad será ciencia de quienes no la tienen, voz ilustrada de quienes no tienen voz y en verdad y razón de las mayorías populares marginadas de la historia. Su vida y su muerte nos han enseñado también que la actividad universitaria comprometida con la liberación de las mayorías populares tiene que luchar contra la irracionalidad y la mentira institucionalizadas. Por tanto, será también signo de contradicción.

La vida y muerte de la comunidad de la UCA han demostrado una vez más cuál es el verdadero compromiso de la fe cristiana y de la vida religiosa. El Padre General de la Compañía de Jesús ha afirmado "con claridad que aun teniendo que afrontar un conflicto socioeconómico duro y explosivo, la comunidad de la UCA ha basado toda su acción en el Evangelio del Señor, quien ha vinculado la bienaventuranza de los pobres con la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia del reino." Por esta misma razón, el nuncio papal los llamó "verdaderos hijos de la Iglesia" y el arzobispo de Palermo, el Cardenal Salvador Pappalardo pudo escribir, el 23 de noviembre, que con "todo derecho... pueden considerarse víctimas de un odio que se desencadenó contra ellos por motivo de su apostolado social..., apoyando con su enseñanza y con su actividad los derechos de los marginados, de los pobres y de los explotados."



Al estar en comunión con ese pueblo, al evangelizarlo desde la universidad y desde el púlpito, al anunciar la buena noticia y denunciar el pecado de la sociedad salvadoreña, al poner en práctica su compromiso solidario, al obedecer y ser fieles a la voluntad de Dios hasta entregar voluntariamente su vida han delineado qué es ser cristiano en El Salvador. Sirvieron al reino de Dios con entusiasmo y sufriendo la sospecha y la marginación de ciertos círculos eclesiásticos. Pero ahora su muerte ha iluminado su vida y su obra mostrando cuánto cristianismo había en su forma de ser Iglesia y jesuita.

Su asesinato ha totalizado sus vidas y les ha dado su verdad más

profunda. Se comprometieron defendiendo a las mayorías pobres salvadoreñas desde la universidad. Su actividad universitaria fue seria, científica y académica, pues fue lo más temido de ellos. Los asesinaron por su palabra razonable y verdadera. Por eso se han sumergido también en el destino del pueblo salvadoreño. Su sangre universitaria se ha mezclado con la sangre de dos mujeres del pueblo salvadoreño sellando eternamente su compromiso. Han asesinado a quienes defendieron a los pobres, aumentando la oscuridad, el dolor y la incertidumbre.

Los pobres ahora están más desprotegidos que antes. Su defensa y su futuro se presentan más complicados. La ausencia de la comunidad de la UCA agranda esas dificultades y ensombrece el horizonte. Pese a todo, aún hay posibilidades para esperar. Ellos dejaron un camino trazado que recorrieron. Sabemos cómo lo hicieron, en qué acertaron y en qué se equivocaron. La necesidad de seguir trabajando por la liberación de los pobres y su ejemplo nos están invitando a seguirlos para adelantar las importantes tareas que han dejado sin terminar. Podemos estar seguros de que contamos con su inspiración y su acompañamiento cercano, solidario y cariñoso. No han muerto, sino que viven en quienes continuamos trabajando para hacer realidad el reino de Dios.

Quisieron apagar su luz, pero ahora ésta brilla más intensamente no sólo en la UCA y en El Salvador, sino en la comunidad internacional. Quisieron desautorizarlos, pero ahora su palabra es más autorizada que antes. Quisieron borrarlos de la realidad nacional, pero ahora sus nombres aparecen por todos lados, donde miles los admiran con cariño y perpetúan su vida y su obra. En cambio, sus asesinos, materiales e intelectuales, tienen que esconderse avergonzados. La sangre que han derramado los acusará hasta el final de sus días. Como en tantos otros casos y como en el caso de Monseñor Romero, los verdugos no han podido triunfar sobre las víctimas. Jamás triunfará la muerte sobre la vida.

Esta edición de ECA en memoria de la comunidad de la UCA y de sus dos colaboradoras comprende cinco partes. En la primera, el lector encontrará una breve presentación biográfica de los ocho asesinados, insistiendo en aquellos rasgos más característicos de cada uno. Este primer artículo va más allá de la simple curiosidad biográfica porque, al mismo tiempo, pretende responder desde la vida qué es ser jesuita en la actualidad en El Salvador. El siguiente artículo es una larga reflexión sobre el significado de estos asesinatos y sobre algunos puntos importantes con los cuales confronta su martirio. En la segunda sección de esta edición hemos incluido los últimos textos que nos de-

jaron los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes y Amando López. En la tercera parte publicamos dos crónicas, la usual de todos los meses y una reconstrucción de los sucesos del 16 de noviembre, según las declaraciones extrajudiciales de los implicados y otros testimonios. En la cuarta parte reproducimos las principales homilias pronunciadas durante el sepelio y en días posteriores, así como algunos poemas. Finalmente, en la tradicional sección de documentación reproducimos la sentencia interlocutoria para la detención provisional del juez cuarto de lo penal, en cuyas manos se encuentra el caso de la UCA y algunos comunicados de la Compañía de Jesús.

